



GD-F-008 V.9

Página 1 de 5

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010003445 DEL 27/02/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010 y en el artículo 16° del Decreto 416 de 2007,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16° del Decreto 416 de 2007, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) definir la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado para los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que mediante la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.709 el día 14 de mayo de 2010, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios estableció la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las definiciones y las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado establecidas en el Decreto 1447 de 2010, el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación en mención para los fines del Decreto 416 de 2007 y periodicidad de las mismas.

Que en los artículos 3°, 4° y 6° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 se estableció el procedimiento para la expedición de la certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado y se definieron los requisitos de información y documentación que el ente territorial debe acreditar para que esta superintendencia otorgue tal certificación.

Que el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, asignó a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación o no de la cobertura mínima de agua potable y alcantarillado de los entes territoriales que son beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias y en su artículo 8° le otorgó competencia para que decida sobre los recursos de reposición que se interpongan contra tales actos administrativos.

2. DE LA RESOLUCIÓN DE NO CERTIFICACIÓN

Que tal como lo establece el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010, las entidades territoriales debían enviar comunicación expresando su intención de ser certificados en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información, acompañándola de la acreditación de la representación legal del solicitante y del poder correspondiente cuando se actuara a través de apoderado y reportar al SUI la información de que tratan los artículos 3° y 6° de la resolución en mención, antes del 30 de abril de cada año.

Que vencido el término para que el Municipio de SILVANIA del Departamento de CUNDINAMARCA, presentara la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución N° SSPD 20101300015115 de 2010 y verificados los registros del archivo documental de esta Entidad, no se encontró manifestación de interés en ser certificado en coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado y por tal razón se procedió a NO CERTIFICARLO mediante la Resolución No. SSPD 20164010027325 de 29 de julio del 2016.

La referida resolución fue notificada personalmente el 29 de septiembre de 2016 tal y como se observa en el expediente.

Mediante escrito radicado bajo el No. 20165290691452 del 11 de octubre de 2016 el municipio interpuso oportunamente recurso de reposición contra la mentada resolución.

3. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 De los argumentos del recurrente

3.1.1 El recurrente manifestó que a la administración nueva no le fue establecido en el proceso de empalme los procedimientos a adelantar ante las entidades de vigilancia y control. Agregó que tampoco obtuvo un recordatorio al respecto por parte de la Superintendencia ni de la Agencia Nacional de Minería.

3.1.2 Señaló que cumple con los demás términos establecidos en la norma respecto al cargue de información.

3.2. De la solicitud de pruebas del recurrente

El municipio solicitó se verificara los requisitos para la obtención de la certificación reportados en la plataforma SUI por el ente territorial y por la empresa prestadora de servicios públicos.

Con el fin de pronunciarse respecto a la prueba solicitada se debe recordar que los artículos 40, 47 y 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) hacen relación a la oportunidad, admisibilidad y términos para el levantamiento y valoración de las pruebas en los procesos administrativos, en concordancia con el artículo 168 del Código General del Proceso, que al respecto establece:

“Artículo 168. Rechazo de plano.

El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.

Al respecto la doctrina anota ¹:

“La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. La conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de este medio probatorio.

La conducencia de la prueba tiene que ver directamente con su eficacia, porque la prueba inconducente será siempre ineficaz. Será entonces, ineficaz la prueba inconducente por no constituir un medio apto para efectos de demostrar ciertos hechos.

La pertinencia, es la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste. En otras palabras, es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso.

La utilidad de la prueba tiene que ver con el aporte que ésta pueda llevar al proceso, respecto del fin de crear certeza acerca de los hechos investigados. En otras palabras, el enriquecimiento del convencimiento del fallador que la prueba conlleva.

¹ PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Ed. Librería del Profesional, 7ª. Edición.

En principio las pruebas inconducentes e impertinentes son inútiles, pero puede suceder que a pesar de que la prueba sea pertinente y conducente, resulte inútil.

En términos generales se puede decir que una prueba es inútil cuando sobra, por no ser idónea, no en sí misma, sino con relación a la utilidad que le debe prestar al proceso, ya que éste sólo puede recaudar las pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo, podríamos igualmente decir que el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes”.

Sobre este punto la doctrina ha sido reiterativa en afirmar que “el proceso debe consumir las pruebas que le sean absolutamente necesarias para pronunciar el fallo y que no puede darse el lujo de recaudar pruebas que sobren, superfluas, redundantes o corroborantes, cuando esto no sea absolutamente necesario”².

Además, la doctrina en materia de régimen probatorio³ afirma que el decreto de cada una de las pruebas a tener en cuenta dentro de un proceso, implica, de un lado, el análisis de su finalidad, vale decir, producir certeza en el fallador sobre la existencia de determinados hechos y, de otra parte, el análisis de la conducencia, pertinencia y utilidad de las mismas, que permita obtener dicha finalidad.

En este orden de ideas, no se observa la utilidad de la prueba cuyo decreto se requiere por el recurrente, toda vez que no ha sido objeto de debate el reporte o no de información al SUI, sino el hecho que el municipio no haya agotado el punto de partida exigido por la norma para que se examinen los demás requisitos establecidos en esta para certificar al municipio, esto es el no haber presentado la respectiva solicitud antes del 30 de abril de 2016.

En este orden de ideas, no se accede a la verificación solicitada, toda vez que resulta impertinente, inconducente e inútil para la presente actuación, máxime cuando el recurrente reconoce no haber agotado el procedimiento de solicitud previsto en el artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010.

En consecuencia, la prueba solicitada será rechazada.

4. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Ahora bien, para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Coordinación procederá a analizar el único argumento expuesto, de la siguiente manera:

- **Del argumento relacionado con no habersele informado a la nueva administración el proceso de empalme y la ausencia de requerimiento por parte de la Superintendencia.**

Manifestó que a la administración nueva no le fueron establecidos en el proceso de empalme los procedimientos a adelantar ante las entidades de vigilancia y control. Agregó que tampoco obtuvo un recordatorio al respecto por parte de la Superintendencia ni de la Agencia Nacional de Minería.

Señaló que cumple con los demás términos establecidos en la norma respecto al cargue de información.

Con relación al argumento en comento se debe recordar que el proceso de certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, se rige por lo dispuesto en la Resolución 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, que definió la metodología a observarse por parte de los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Por consiguiente, el acto administrativo de no certificación se expide no sólo para los municipios que manifestando su interés en obtenerla no cumplan con las exigencias normativas para el

² PARRA QUIJANO, Jairo. “MANUAL DE DERECHO PROBATORIO” Ediciones Librería del Profesional. Séptima Edición. Bogotá, 1997, Páginas 94, 95.

³ PARRA QUIJANO, Jairo. “MANUAL DE DERECHO PROBATORIO” Ediciones Librería del Profesional. Séptima Edición. Bogotá, 1997, Páginas 94, 95.

efecto, sino también para todos aquellos que siendo beneficiarios de regalías y compensaciones monetarias no hayan manifestado interés en conseguirla, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 6 de la resolución en mención, que señala:

“Parágrafo 1°. Se entenderá que la entidad territorial que no presente la solicitud mencionada en el artículo 4° de la presente resolución, dentro de los plazos establecidos, no está interesada en obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, y por lo tanto, mediante acto administrativo motivado, la Superintendencia NO CERTIFICARÁ al respectivo ente territorial”.

En efecto, el acto administrativo objeto de recurso de reposición bajo estudio, da aplicación a tal disposición toda vez que de una parte, el Municipio de Silvania - Cundinamarca fue relacionado como beneficiario de regalías directas y compensaciones monetarias en el radicado No. SSPD 20165290123362 y 20168100075612 del 1 de marzo de los corrientes, remitido a esta Entidad por la Agencia Nacional de Minería y de otra, **en atención a que el ente territorial no presentó a 30 de abril del 2016**, la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010.

En este entendido, es claro que el ente territorial fue NO CERTIFICADO toda vez que NO manifestó su interés de obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado antes del 30 de abril de 2016, sin que sea necesario evaluar el cumplimiento del ente territorial a las demás exigencias establecidas en la norma.

Sobre el particular es preciso mencionar, que los plazos constituyen una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la Ley 1564 de 2012 *“Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.*

La Corte Constitucional se ha pronunciado así al respecto⁴ en los siguientes términos:

“Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.”, además advierte que “(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo.” (...) En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso”.

En este entendido es claro que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 4° de la Resolución No. 20101300015115 de 2010 sin solicitar la certificación objeto de estudio, la única decisión viable que podía tomar esta Superintendencia consistía en no certificar al ente territorial.

Por lo anterior no es válido señalar que con ánimo de prosperidad que en el empalme no le fueron informados los procedimientos a adelantar ante las entidades de vigilancia y control así como que no obtuvo un recordatorio al respecto por parte de la Superintendencia ni de la Agencia Nacional de Minería, toda vez que es de recordar que el proceso de certificación es de carácter institucional y por tanto es el ente territorial como tal, quien debe acreditar su cumplimiento a los requisitos y recibe las consecuencias de una certificación o no certificación, con independencia del funcionario que desempeñara el cargo de Alcalde Municipal en el mismo y de las responsabilidades que se den al interior del ente territorial.

En consecuencia, una vez transcurrido el término para verificar que el ente territorial hubiera efectuado la solicitud de que trata el artículo 4° de la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010, este Despacho constató que el hoy recurrente no efectuó la misma, lo que conlleva por expresa disposición normativa a que el municipio fuera no certificado, sin que pueda el ente territorial excusarse en la ignorancia de la norma, toda vez que es claro que el Artículo 9° del

⁴ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería.

Código Civil, establece que *"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa"* así como del artículo 56 de la Ley 4 de 1913 (Código de Régimen Político) que en idéntico sentido *ad litteram* establece que *"(...) No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla (...)".*

Ahora bien, el argumento presentado por el recurrente evidencia que pretende exonerarse de la responsabilidad establecida en la norma, manifestando que el Despacho debió requerirlo para que se allanara a cumplir lo establecido en la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010, lo que evidencia que el municipio pretende alegar su propia culpa su favor, respecto a lo cual, la Corte Constitucional en Sentencia No. C-083-95, en relación con el principio NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINE ALLEGANS / PRINCIPIO *"NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA"*/PRINCIPIO DE LA BUENA FE, ha sostenido:

"... No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fé entendida como la ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están amparados por éste.(...)"

Por consiguiente no es válido que el recurrente reconozca la propia culpa con el fin de derivar un beneficio trasladando su responsabilidad por un incumplimiento a la administración, tal y como sucedió en el caso concreto, máxime cuando es claro que la Resolución No. SSPD 20101300015115 de 2010 no establece que la Superintendencia deba requerir al municipio o instarlo a que presente la solicitud de certificación y por el contrario sí establece que el ente territorial debe agotar un procedimiento para que se le expida dicha certificación, circunstancia última que no se presentó en el caso concreto.

Finalmente, se considera procedente recordar que el artículo 6° de la referida resolución preceptúa que la consecuencia de la no certificación, es el no permitir a la entidad territorial no certificada, el cambio de la destinación de sus recursos de regalías directas y compensaciones monetarias.

Así las cosas, no se accederá a revocar la resolución objeto de recurso, la cual en consecuencia será confirmada.

Por lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR el decreto de la prueba testimonial solicitada por el recurrente mediante los escritos radicados bajo el No. 20165290691452 del 11 de octubre de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010027325 de 29 de julio del 2016, proferida por la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente la presente resolución al Municipio de SILVANIA del Departamento de CUNDINAMARCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 69 del C.P.A.C.A.

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNÍQUESE el contenido de la presente resolución al Departamento Nacional de Planeación - DNP.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Bogotá D.C.



MARIA EUGENIA SIERRA BOTERO
Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Katherine Arenas – Abogada Contratista - Grupo de Certificaciones e Información
Expediente: 2016401351601611E